

Las empresas no se fían del SEPE para buscar trabajadores

J. E. MADRID.

El catálogo de ocupaciones de difícil ocupación es se ha convertido en síntoma de hasta qué punto el caos y la desinformación en el control de las vacantes se ha convertido en norma en España mientras las empresas recurren a todo tipo de subterfugios. En teoría, contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo autonómicos han encontrado difícil-

tad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.

La presencia de una ocupación en el catálogo de una provincia implica, para el empleador, la "posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar" dirigida a un profesional extranjero. El problema es que las empresas cada vez notifican menos vacantes a los servicios públicos de empleo, es una

de las claves que explica la ineficacia de las políticas activas. Y el catálogo es un claro reflejo de ello.

Aunque en esta lista, históricamente, se habían recogido profesiones de todo tipo, incluyendo ámbitos como la ingeniería, la tecnología, la sanidad o la educación, en la última década se ha ido restringido a solo veinte, que se reparten en dos grupos: dieciocho corresponden a profesiones relacionadas con la marina mercante. Otras dos

corresponden al sector deportivo (deportistas de élite y entrenadores). El surrealismo llega cuando las profesiones marineras, que deberían aparecer lógicamente solo en provincias con mar, también se recogen en Lleida y Madrid, que carecen de costa.

El secretario general de UGT Pepe Álvarez, también se refería a este fracaso en una reciente entrevista con *elEconomista.es*. "Si no queremos hacer demagogia, no pode-

mos decir que la gente no quiere trabajar, sino crear las condiciones para que los puestos de trabajo los cubran nacionales". Aunque para ello las claves políticas activas desarrolladas por los servicios públicos autonómicos y coordinadas por el SEPE, tras una Ley de Empleo que para el líder sindical se ha convertido en "papel mojado" al no ser negociada ni con las comunidades autónomas ni con los interlocutores sociales.